

# Un código de derecho electoral: una propuesta transparente

Dr.<sup>a</sup> Hermenegilda del Rosario Fondeur Ramírez<sup>1</sup>

Recibido: 17 de marzo de 2025 – Aceptado: 5 de septiembre de 2025

## Resumen

Este artículo aborda la necesidad de armonizar y unificar el marco normativo del derecho electoral dominicano, examinando los procesos de integración jurídica y sus implicaciones. Se destacan las ventajas y desafíos de esta unificación, así como su impacto en la vigencia y validez del ordenamiento electoral, con el objetivo de fortalecer la seguridad jurídica y la estabilidad democrática del país.

**Palabras clave:** Derecho electoral, unificación normativa, codificación, previsibilidad, seguridad jurídica.

## Abstract

*This article addresses the need to harmonize and unify the regulatory framework of Dominican electoral law, examining the processes of legal integration and their implications. It highlights the advantages and challenges of this unification, as well as its impact on the validity and validity of the electoral system, with the aim of strengthening legal security and democratic stability in the country.*

**Keywords:** Electoral law, regulatory unification, coding, predictability, legal certainty.

<sup>1</sup> Doctora en Derecho por la Universidad Autónoma de Santo Domingo (UASD, 1987), con maestría en Derecho constitucional y procedimiento constitucional y en Ciencias Políticas y Administración Electoral, ambas por la UASD. Posgrado en Derecho Civil, en Derecho Civil y Procesal Civil y en Pedagogía Universitaria, todas por la Pontificia Universidad Católica Madre y Maestra (PUCMM). Maestría en Derecho Electoral y Partidos Políticos por la Universidad de Castilla-La Mancha (UCLM). Ha dedicado su extensa labor profesional a la práctica privada especializada en Derecho Civil y Comercial. Desempeñó la función de Oficial del Estado Civil de la Primera y de la Décima Circunscripción del Distrito Nacional entre 1999 y 2012. De 2012 a 2018 se desempeñó como Directora de Rectificaciones de Actas del Estado Civil en el Tribunal Superior Electoral, pasando luego a la posición de Asesora General de la Presidencia de dicho colegiado. Fungió como jueza suplente del indicado Tribunal desde el 28 de junio de 2021 hasta el 19 de junio de 2023, pasando luego a ser juramentada como jueza titular. En el ámbito académico, ha tenido una destacada labor como catedrática en la PUCMM y en la Universidad Nacional Pedro Henríquez Ureña (UNPHU) por más de 15 años. El 16 de julio de 2025, fue reconocida por la PUCMM como «Docente de Valor» por su invaluable y permanente colaboración docente.

## 1. Preliminar

La necesidad de un código de derecho electoral y procesal electoral en la República Dominicana se caracteriza por las debilidades del marco normativo, y por la dispersión de aspectos esenciales del ejercicio electoral y político. Actualmente, las competencias y procedimientos de los entes y órganos administrativos y jurisdiccionales se encuentran en diversos cuerpos legales —como la Ley núm.39-25, Orgánica del Tribunal Superior Electoral; la Ley núm.20-23, Orgánica del Régimen Electoral; y la Ley núm.33-18, de Partidos, Agrupaciones y Movimientos Políticos—, sin una armonización que garantice coherencia, previsibilidad y seguridad jurídica. Además, la eventual legislación para regular las candidaturas independientes, derivada de la sentencia TC/00788/2024.

Esta fragmentación normativa, —pues en otros sistemas jurídicos y en diversas ramas del Derecho se admite la coexistencia de normas dispersas— incrementa el riesgo de interpretaciones divergentes, decisiones contradictorias y aplicación desigual de las reglas electorales, lo que sí compromete el principio de seguridad jurídica, entendido por el Tribunal Constitucional como «[...] la certeza que tienen los individuos que integran una sociedad acerca de cuáles son sus derechos y obligaciones [...]»<sup>2</sup>.

La redacción de una norma electoral debe partir de los principios y valores constitucionales que

rigen la organización del Estado dominicano, especialmente la dignidad humana «[...] cuyo reconocimiento general compromete el fundamento político del Estado [...]»<sup>3</sup>.

Además, la experiencia comparada demuestra que la codificación electoral contribuye a la estabilidad normativa y a la confianza pública. En el ámbito regional, Colombia ha integrado la materia electoral en estatutos y leyes de organización electoral con desarrollo reglamentario sistemático; Ecuador articula su régimen a través del Código de la Democracia, que unifica la organización electoral, el financiamiento y la justicia electoral; y México ha armonizado su andamiaje federal y local mediante leyes generales. Estas experiencias mejoran la aplicabilidad y refuerza la previsibilidad.

En el contexto dominicano, este análisis sostiene que la dispersión normativa debilita la seguridad jurídica y la previsibilidad institucional. Por ello, una codificación integral —que unifique, actualice y coordine las disposiciones vigentes— es condición necesaria para mejorar la calidad regulatoria, reducir la discrecionalidad interpretativa y fortalecer la confianza ciudadana.

2 República Dominicana, Tribunal Constitucional Dominicano. 2013. *Acción Directa de Inconstitucionalidad*. Sentencia TC/0100/13. 2013, p. 33. De <https://tribunalsitestorage.blob.core.windows.net/media/7524/sentencia-tc-0100-13-c.pdf>

3 Colombia, Corte Constitucional de Colombia. *Acción de Tutela*. T-291-16, 02 de 06 de 2016. Párr. 23. De <https://www.corteconstitucional.gov.co/relatoria/2016/t-291-16.htm>

## 2. Concepto y naturaleza del derecho electoral y del derecho procesal electoral

### A. Definición doctrinal y funcional del derecho electoral como rama autónoma del derecho público.

Hans Kelsen considera, que el derecho debe ser concebido como un sistema normativo único, cuya validez reside en el Estado como su fuente legítima. Sobre este punto Nohlen, en referencia a la postura de Kelsen y vinculado al derecho electoral, establece que:

Sin embargo, por distintos motivos el derecho ha sido dividido en diferentes ramas. Las divisiones surgen como una necesidad propia de su mejor estudio, interpretación y aplicación. Son también una consecuencia de características propias que exhiben, dentro del género, las diferentes ramas del derecho susceptibles de ser individualizadas<sup>4</sup>.

Con una visión más amplia Flavio Galván Rivera fundamenta la autonomía del derecho electoral como rama del derecho en el sentido siguiente:

(...) el derecho electoral es autónomo, porque existe legislación especializada —criterio legislativo—; porque se han

instituido tribunales electorales especializados —criterio jurisdiccional—; porque, aun cuando escasa todavía, existe literatura jurídica especializada en la materia —criterio científico—, y porque en las instituciones educativas donde se imparte la profesión jurídica, existen asignaturas especializadas sobre el tema. Finalmente, porque el derecho electoral ha estructurado su propio lenguaje científico; el significado de las voces usadas no puede buscarse con éxito en los diccionarios de consulta ordinaria, sino únicamente en los especializados en esta rama del conocimiento<sup>5</sup>.

En tanto el derecho electoral<sup>6</sup> constituye una rama autónoma del derecho público, encargada de los procesos mediante los cuales los ciudadanos ejercen su participación política. En el ámbito nacional encuentra expresión actualmente en diversas leyes, entre ellas, la Ley núm. 20-23, Orgánica del Régimen Electoral, y la Ley núm. 33-18, de Partidos, Agrupaciones y Movimientos Políticos, Ley núm. 39-25, Orgánica del Tribunal Superior Electoral.

Resulta natural que, del estudio del derecho electoral, como disciplina que define las reglas del juego democrático, se derive el análisis de

4 Nohlen, Dieter, y otros. 2007. *Tratado de derecho electoral comparado de América Latina* [en línea]. 2.ª edición. México: Fondo de Cultura Económica; Instituto Interamericano de Derechos Humanos; Universidad de Heidelberg; International IDEA; Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación; Instituto Federal Electoral., 2007. P. 30.

5 Galván Rivera, Flavio. 1993. El principio de legalidad en materia electoral. *Tendencias contemporáneas del derecho electoral en el mundo. Memoria del II Congreso Internacional de Derecho Electoral*. México: Cámara de Diputados del H. Congreso de la Unión; Instituto Federal Electoral; Tribunal Federal Electoral; Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM, 1993, pp. 677-701.

6 «9.7.9. Hay que señalar, además, que el derecho electoral, como disciplina jurídica, es autónomo y pertenece al derecho público. En ese sentido, se conceptualiza como: El conjunto de valores, principios y normas que atañen al derecho subjetivo del sufragio, y regulan los procedimientos de designación, y en su caso de revocación de tal designación, de los miembros de ciertos órganos depositarios de las funciones del poder público, así como la adopción de resoluciones relativas a temas públicos trascendentales, mediante la emisión del voto de la ciudadanía. 9.7.10. Asimismo, el derecho electoral es entendido como: Una rama del derecho público, ya que regula actividades relativas a la determinación (por vía de legitimación y proclamación de autoridades) y actuación de autoridades (electorales propiamente, partidos políticos, e instancias relacionadas) y cuerpos (unipersonales y colegiados) estatales y la atribución de derechos y la exigencia de deberes a individuos, en general, a partir de su condición de ciudadanos». Tribunal Superior Electoral, sentencia núm. TSE-027-2019, de fecha siete (07) del mes de agosto del año dos mil diecinueve (2019).

su dimensión procesal. Ello obedece a que la eficacia de las normas sustantivas depende de la existencia de un marco procesal especializado que asegure su cumplimiento y tutela. El derecho procesal electoral emerge como el complemento indispensable del derecho electoral.

La autonomía dogmática del derecho electoral y la garantía de seguridad jurídica justifican una codificación que reafirme la jerarquía normativa y la reserva de ley en materias que hoy el **Reglamento Contencioso Electoral (TSE)** disciplina por vía subalterna, entre otros: admisibilidad y requisitos del acto introductivo; cómputo de plazos; preclusión y caducidad; legitimación activa y pasiva; competencia y recusación; prueba y reglas de valoración; medidas cautelares; acumulación y litispendencia; nulidades procesales; ejecución de sentencias; y recursos —impugnación ordinaria y extraordinaria—. Trasladar estos institutos al nivel legal no es un mero formalismo: es exigencia de la supremacía constitucional.

### ***B. Alcance y contenido del derecho procesal electoral, diferenciándolo del derecho procesal común***

El derecho procesal electoral «(..) es la rama jurídica que regula el proceso jurisdiccional, mediante el cual se resuelven las controversias legales, suscitadas con motivo de la impugnación de los actos y resoluciones electorales, y

que se deciden por un tribunal autónomo (...)»<sup>7</sup>, así como las actuaciones administrativas con efectos directos en el ejercicio del sufragio. Su especialidad radica en que, aunque comparte fundamentos con el derecho procesal común, introduce reglas adaptadas a la naturaleza temporal y perentoria de los procesos electorales. Así, los plazos reducidos, la prevalencia de la tutela efectiva sobre el formalismo y la posibilidad de revisar actos administrativos electorales en sede jurisdiccional constituyen elementos característicos.

El derecho procesal electoral es indispensable para que los procesos se administren con celeridad y certeza, respecto de los tiempos del calendario electoral y «(..) asegurar que la resolución que ponga término al proceso podrá ejecutarse, o lo que es lo mismo, evitar la inutilidad práctica de la sentencia por resultar inejecutable [...]»<sup>8</sup>.

### ***C. Relación con el derecho constitucional y el principio democrático***

Hans Kelsen afirma que «un orden jurídico como un todo, y las normas jurídicas particulares que constituyen este orden jurídico se consideran válidas si, en todos los ámbitos, son obedecidas y aplicadas, o sea, si tienen eficacia»<sup>9</sup>.

En el sistema electoral dominicano la validez de las normas no se cuestiona; cada disposición

<sup>7</sup> Sánchez León, Gregorio. Principios de Derecho Sustantivo y Procesal Electoral Estatal y Municipal. *Justicia Electoral. Revista del Tribunal Federal Electoral*, vol. II, núm. 2. México, D. F.: Tribunal Federal Electoral, 1993, p. 121. citado por Galván Rivera Flavio, *Derecho procesal electoral: concepto, génesis y autonomía*, conferencia en la Universidad Nacional Autónoma de México, Facultad de Derecho, 29 de abril de 2014, México: Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, 2014, p. 11.

<sup>8</sup> Cosculluela Montaner, Luis, *Manual de Derecho Administrativo*, 33.ª ed. (Cizur Menor [Navarra]: Aranzadi, 2022), p. 603.

<sup>9</sup> Kelsen, Hans. *Teoría pura del derecho*. 1.ª ed. México: Universidad Nacional Autónoma de México, 1960, p. 30.

tiene efecto vinculante sobre la administración electoral, la jurisdicción electoral y la ciudadanía. Sin embargo, la dispersión normativa puede generar conflictos de interpretación que afecten la correcta aplicación de los principios democráticos.

El derecho electoral y el derecho procesal electoral se vinculan con el derecho constitucional, en cuanto concretan el principio democrático consagrado en los artículos 2, 212, 214 y 216 de la Constitución. El primero garantiza la soberanía popular; el segundo la organización de los procesos electorales bajo principios de libertad, equidad y transparencia; el tercero la función de la jurisdicción electoral como garantía de participación; y, el cuarto, el papel de los partidos políticos como instrumentos de canalización ciudadana.

Mientras el derecho constitucional establece los principios rectores, el derecho electoral y su vertiente procesal los operativizan; la codificación de ambas ramas constituye una herramienta para fortalecer la democracia y la confianza ciudadana.

### 3. Principios constitucionales comprometidos: seguridad jurídica, igualdad, participación política y tutela judicial efectiva

La función hermenéutica de la Constitución impone interpretar el ordenamiento con la máxima protección de los derechos fundamentales. Bajo esa premisa conviene destacar la relevancia del rigor semántico en la elaboración de las normas, siguiendo la enseñanza de Luigi Ferrajoli, quien afirma que «la cuestión del rigor semántico del lenguaje legal es condición para el mantenimiento del Estado de derecho y de la democracia»<sup>10</sup>. Para que las normas jurídicas puedan regular efectivamente la conducta de las personas «deben estar sometidas a una metarregla que les imponga taxatividad y precisión, garantizando así la verificabilidad y la posibilidad de refutar las tesis que declaran su violación»<sup>11</sup>.

Además, este enfoque subraya la necesidad de un apego irrestricto a la constitucionalidad, como medio para reducir la carga de subjetividad en la aplicación de la norma y asegurar la igualdad en su interpretación. De ahí que el juez tenga el deber de aplicar la ley conforme a la Constitución y, en caso de imposibilidad, promover su control de constitucionalidad. Por tanto, «la sujeción del juez es sí a la ley, pero a la ley en cuanto constitucionalmente válida»<sup>12</sup>.

Asimismo, cada caso exige valoración conforme al marco constitucional. No obstante,

10 Ferrajoli, Luigi, *Los derechos y sus garantías: conversación con Mauro Barberi*. Madrid, España. :Editorial Trotta, 2016, p. 22.

11 Ferrajoli, *Los derechos y sus garantías*, p. 22.

12 Ferrajoli, *Los derechos y sus garantías*, p. 47.

Ferrajoli advierte que «el único modo que tiene el legislador de someter al juez a su voluntad y de reducir al máximo la discrecionalidad, es hacer bien su propio trabajo, esto es, producir normas legales con un significado lo más unívoco y preciso posible»<sup>13</sup>. Solo así se evita que la justicia dependa de criterios personales del juzgador, asegurando una aplicación igualitaria y previsible para todos.

La precisión y validez constitucional de la norma no son fines en sí mismos, sino condiciones para que, en su aplicación, se materialicen los principios que orientan el Estado social y democrático de derecho. Solo a través de reglas claras, coherentes y conformes a la Constitución es posible que principios como la seguridad jurídica, la igualdad, la participación política y la tutela judicial efectiva operen de manera real y uniforme en todos los casos.

La Supremacía Constitucional es un principio rector en el sistema jurídico dominicano, consagrado en el artículo 6 de la Constitución, que establece: «todas las personas y los órganos que ejercen potestades públicas están sujetos a la Constitución, norma suprema y fundamento del ordenamiento jurídico del Estado»<sup>14</sup>. Esta sujeción constitucional coloca a las personas como centro desde la dignidad humana, el Art. 38 del texto constitucional dispone que:

El Estado se fundamenta en el respeto a la dignidad de la persona y se organiza para

la protección real y efectiva de los derechos fundamentales que le son inherentes. La dignidad del ser humano es sagrada, innata e inviolable; su respeto y protección constituyen una responsabilidad esencial de los poderes públicos<sup>15</sup>.

El Tribunal Constitucional en la Sentencia TC /0552/15 ha establecido que la Seguridad Jurídica «[...] es considerada como un principio jurídico general consustancial a todo Estado de Derecho, que se erige en garantía de la aplicación objetiva de la ley, de tal modo que asegura la previsibilidad respecto de los actos de los poderes públicos, delimitando sus facultades y deberes. [...]».<sup>16</sup> La existencia de múltiples normas dispersas y, en ocasiones, contradictorias en materia electoral, dificulta la aplicación uniforme de la ley y socava la confianza en el sistema electoral.

También el principio de igualdad es una piedra angular, pues tal como lo establece el artículo 39 de la Constitución Dominicana, no da lugar a aplicaciones diferenciadas de la ley que afecten la equidad en la competencia política. Además, la **igualdad ante la ley** es otro principio constitucional clave que debe prevalecer en el derecho electoral, a los fines de evitar disparidad en el tratamiento de los actores políticos.

Del mismo modo, el principio de legalidad, que subyace en el derecho constitucional, exige que todas las actuaciones del Estado

<sup>13</sup> Ferrajoli, *Los derechos y sus garantías*, p. 48.

<sup>14</sup> República Dominicana, *Constitución de la República Dominicana* 2024. Santo Domingo, 31 de octubre de 2024, Art. 6.

<sup>15</sup> *Ibid.*, Art. 38.

<sup>16</sup> República Dominicana, Tribunal Constitucional Dominicano, Acción directa de inconstitucionalidad, Sentencia TC /0552/15, 3 de diciembre 2015, p. 28.



estén reguladas por normas claras, precisas y accesibles.

En este contexto el principio de participación política constituye una de las bases esenciales del Estado democrático de derecho, al reconocer el derecho de toda persona a intervenir en la formación de la voluntad política del Estado, ya sea de manera directa o a través de representantes libremente elegidos. Este principio se encuentra consagrado en el artículo 22, numeral 1, de la Constitución de la República Dominicana, que reconoce a los ciudadanos el derecho a «elegir y ser elegibles para los cargos que establece la Constitución»<sup>17</sup> y a participar en procesos de consulta popular.

Es preciso destacar el debido proceso como una garantía fundamental con mecanismos de tutela para que ninguna persona sea privada de sus derechos sin la observancia de procedimientos previamente establecidos por la ley y respetuosos de las reglas esenciales de justicia. Consagrado en el artículo 69 de la *Carta Magna*, a fin de que a toda persona le sea respetado el derecho a ser oída, con las debidas garantías, dentro de un plazo razonable y ante un juez o tribunal competente, independiente e imparcial.

En síntesis, la observancia rigurosa de los principios constituye la base sobre la que se erige un sistema electoral legítimo y confiable. Solo

sobre este andamiaje normativo y garantista puede construirse un desarrollo democrático sostenible y una consolidación institucional efectiva.

#### 4. Teoría de la codificación como técnica legislativa

Guillermo Cabanellas de Torres estima que la codificación puede definirse como «la reunión de las leyes de un Estado, relativas a una rama jurídica determinada, en un cuerpo orgánico, sistemático y con unidad científica»<sup>18</sup>. Desde la perspectiva del *civil law*, «Ese sistema buscaba la estabilidad legal en todo un imperio. Por eso, se creó una ley homogénea, única y escrita que perdurase en el tiempo»<sup>19</sup>. En cambio, en el *common law*, José María de Eizaguirre citando a Zweigert/Kötzky destaca que «se ha desarrollado de decisión en decisión mediante una paulatina tradición creciente: conforme a su origen histórico no es Derecho legal, sino Derecho de casos»<sup>20</sup>.

##### A. Orígenes en el *civil law* y comparación con el *common law*

En el *civil law*, la codificación responde a una lógica de previsibilidad: un único texto, de aplicación universal, que organiza las instituciones jurídicas y limita la discrecionalidad interpretativa. En el *common law*, por el contrario, la dispersión es funcional, pues el derecho se moldea a partir de precedentes judiciales y

17 República Dominicana, *Constitución de la República Dominicana* 2024. Santo Domingo, 31 de octubre de 2024, Art. 22, numeral 1.

18 Cabanellas de Torres, Guillermo. *Diccionario jurídico elemental*. 18.ª ed. Buenos Aires: Heliasta, 2006, p.85.

19 Galiana, Andrea. 2024. *Common Law y Civil Law: Diferencias clave* [en línea]. En: Kelsen & Hart. 12 de julio de 2024. [Consulta: 21 de agosto de 2025]. Disponible en: <https://www.kelsen-hart.es/common-law-y-civil-law-diferencias-clave/>

20 Eizaguirre Bermejo, José María. *Civil law: la vigencia de una categoría convencional*. Anuario de Derecho Civil, tomo LXV, fascículo II, Madrid: Ministerio de Justicia, 2012, pp. 533–546, en 536. Disponible en: <https://revistas.mjusticia.gob.es/index.php/ADC/article/view/3694>.

actos legislativos fragmentarios. Sin embargo, el legislador dominicano, históricamente influenciado por el modelo francés, ha adoptado códigos en áreas clave —como el Código Civil o el Código Penal—, pero ha mantenido el ámbito electoral bajo un esquema híbrido, combinando leyes sectoriales, reglamentos y jurisprudencia que coexisten sin plena armonización.

### B. Ventajas de la codificación

La codificación ofrece ventajas evidentes: unificación de criterios, reducción de conflictos interpretativos, mejora en la accesibilidad ciudadana y fortalecimiento de la seguridad jurídica. Como señala Zagrebelsky el código, en su concepción histórica, concentra «la voluntad positiva del legislador [...] en un proyecto jurídico basado en la razón, con generalidad, abstracción, sistematicidad y plenitud»<sup>21</sup>. Este carácter estructurante explica por qué, en el contexto dominicano, la fragmentación del derecho electoral produce efectos más nocivos que las potenciales limitaciones de la codificación. Las ventajas superan ampliamente sus desventajas, especialmente en sistemas donde la dispersión legislativa compromete la coherencia y previsibilidad del ordenamiento.

Por tanto, un código es un «Conjunto de normas legales sistemáticas que regulan unitariamente una materia determinada»<sup>22</sup>. Se crean

mediante la aprobación de una ley que ordena, unifica y sistematiza el contenido disperso.

## 5. Vigencia y validez de la norma en el sistema jurídico electoral

En el derecho electoral dominicano la discusión sobre validez y vigencia de la norma exige ir más allá de la mera constatación de su existencia formal. Se trata de que el texto, su diseño y aplicación logren estabilidad, previsibilidad y capacidad de respuesta frente a cambios políticos, sociales y tecnológicos. Esta dimensión funcional del ordenamiento electoral es la que determina su legitimidad práctica.

En términos kelsenianos, «(...) un individuo está jurídicamente obligado a realizar una determinada conducta en la medida en que la conducta opuesta viene establecida en la norma de derecho como condición de un acto coactivo al que se califica de consecuencia del ilícito (...)»<sup>23</sup>. Este planteamiento, propio del positivismo normativo, se ve complementado por la noción de que «(...) la participación en la tarea legislativa de los individuos sometidos a las normas constituye el principal rasgo distintivo de la democracia frente a la autocracia (...)»<sup>24</sup>. En el ámbito electoral, ello implica que la validez no solo deriva de su creación conforme a los procesos legislativos, sino de su aceptación social y de su eficacia para regular de manera justa la competencia política.

21 Zagrebelsky, Gustavo. *El derecho dúctil: ley, derechos, justicia*. 10.ª ed. Madrid: Editorial Trotta, 2011, p. 32.

22 Real Academia Española; Consejo General Del Poder Judicial. *Diccionario del español jurídico*. Madrid: Editorial Planeta, 2019, p. 381.

23 Kelsen, Hans. *Teoría pura del derecho: introducción a los problemas de la ciencia jurídica*. Madrid: Trotta, 1.ª ed. española, octubre 2011 [obra original, 1934], p. 72.

24 Kelsen, Hans. *Teoría pura del derecho: introducción a los problemas de la ciencia jurídica*. Madrid: Trotta, 1.ª ed. española, octubre 2011 [obra original, 1934], p. 74.



La vigencia, por su parte, supone que la norma permanezca operativa y actualizada frente a cambios sociales, tecnológicos y políticos. Un texto normativo que no se adapta a estas transformaciones corre el riesgo de convertirse en letra muerta, generando vacíos normativos y conflictos interpretativos. Ejemplos recientes lo demuestran: el artículo 30.4 de la Ley núm. 33-18, de Partidos, Agrupaciones y Movimientos Políticos, exige agotar la vía interna intrapartidaria antes de acceder a la justicia electoral; sin embargo, la inexistencia de este mecanismo en la reglamentación estatutaria de varios partidos ha llevado al Tribunal Superior Electoral a flexibilizar su aplicación mediante sentencias y reglamentos, evitando sancionar con inadmisión en tales casos. Asimismo, la sentencia TC/0788/2024 sobre candidaturas independientes refleja cómo la jurisdicción constitucional puede reinterpretar e incluso sustituir disposiciones para ajustarlas a los principios y valores del Estado constitucional de derecho.

Estos precedentes evidencian que la validez y la vigencia no son conceptos aislados, sino interdependientes: la primera otorga legitimidad y aceptación, mientras la segunda asegura adaptabilidad y eficacia.

## 6. Estado actual del sistema electoral en República Dominicana

Los principales instrumentos que regulan el ámbito electoral en República Dominicana son los siguientes<sup>25</sup>:

- Ley núm. 20-23, Orgánica del Régimen Electoral. Deroga la Ley núm. 15-19, Orgánica del Régimen Electoral y sus modificaciones.
- Ley núm. 33-18, de Partidos, Agrupaciones y Movimientos Políticos.
- Ley núm. 39-25, Orgánica del Tribunal Superior Electoral.
- Reglamento de Procedimiento Contencioso Electoral (TSE).
- Ley núm.157-13, Instituye el sistema de voto preferencial en República Dominicana.

La estructura normativa electoral de República Dominicana establece un marco legal para la organización y el desarrollo de los procesos electorales. Sin embargo, la dispersión de estas normas refleja la necesidad de unificar y consolidar la legislación electoral.

Un ejemplo palpable de los inconvenientes que conllevó esta dispersión ocurrió entre la Ley núm. 33-18 y la anterior Ley núm. 15-19 —la anterior Ley de Régimen Electoral— y que se extendió hasta la actual Ley núm. 20-23.

En la ley relativa a los partidos, agrupaciones y movimientos políticos se plasmó en su artículo

<sup>25</sup> A modo complementario, algunos aspectos del sistema también se pueden hallar en la Ley núm. 30-06, del 16 de febrero de 2006, que prohíbe la utilización por parte de agrupaciones o partidos políticos de lemas o dibujos contentivos del símbolo, colores emblema o bandera, ya registrados en la Junta Central Electoral que distinguen a una agrupación política, sin la autorización legal del grupo o partido político indicado con dichos símbolos, colores o emblemas; la Ley núm.176-07, del 17 de julio de 2007, del Distrito Nacional y los Municipios; y la Ley núm. 137-11 Orgánica del Tribunal Constitucional y de los procedimientos constitucionales.

53 que «[l]a Junta Central Electoral y las juntas electorales no admitirán lista de candidaturas<sup>26</sup> para cargos de elección popular que contengan menos del cuarenta por ciento (40%) y más (...) (60%) de hombres y mujeres»<sup>27</sup>, lo que implicaba que cada lista presentada ante las juntas electorales y la Junta Central Electoral debería respetar la proporción antes mencionada.

A menos de un año se promulgó la otrora Ley de Régimen Electoral que dispuso que la proporción sería a nivel nacional, por lo que se pudo interpretar que una lista podía estar integrada por un solo género, siempre que, de manera global, las candidaturas de una organización política respetasen la proporción en los términos de su artículo 136, a saber:

Las nominaciones y propuestas de candidaturas a la Cámara de Diputados, a las Regidurías y vocales se registrarán por el principio de equidad de género, por lo que éstas deberán estar integradas de acuerdo a lo establecido en la Ley de Partidos, por no menos de un 40% ni más de un 60% de hombres y mujeres de la propuesta nacional<sup>28</sup> [Sic].

Esta discrepancia entre si las nominaciones y propuestas de candidaturas tenían que respetar la proporción de género en la propuesta nacional o en las listas de candidatura, conllevó a que mediante sentencia el Tribunal Superior Electoral haga alusión «(...) al sentido, alcance

y aplicación de la proporción o cuota de género»<sup>29</sup> pues:

11.2. [...] luego de haber realizado un análisis exhaustivo en relación a las indicadas disposiciones legales, ha comprobado que las mismas entrañan evidentes diferencias en cuanto en su redacción y contenido<sup>30</sup>, lo cual pudiera generar un impacto de consecuencias importantes para todo el sistema electoral en el país, especialmente lo relacionado con el ejercicio de los derechos de participación política de los dominicanos.

[...] como hemos indicado, respecto de todos aquellos ciudadanos dominicanos de ambos géneros que se encuentran hábiles para ejercer el derecho al sufragio, en virtud de que, de la aplicación que hagan los órganos y demás actores que conforman el sistema electoral en la República Dominicana, específicamente de lo previsto en el artículo 136 de la Ley núm. 15-19 Orgánica de Régimen Electoral, en relación a la estructuración de las propuestas de candidaturas que deban ser realizadas para ser inscritas ante la Junta Central Electoral y las Juntas Electorales se impactarían de forma negativa conquistas ya logradas en el país, especialmente en relación al propósito y los fines que procura la proporción de género prevista en la ley, cuya situación amerita un abordaje exhaustivo por parte

26 El subrayado es nuestro.

27 República Dominicana. Ley núm. 33 18, de Partidos, Agrupaciones y Movimientos Políticos, de 15 de agosto de 2018. Art. 53.

28 República Dominicana. Ley núm. 15 19, Orgánica del Régimen Electoral, 18 de febrero de 2019. Art. 136.

29 República Dominicana, Tribunal Superior Electoral, Sentencia TSE-085-2019, de fecha treinta (30) de octubre de dos mil diecinueve (2019), p. 25.

30 El subrayado es nuestro.

de este órgano, a los fines de establecer el alcance y sentido más adecuado en que debe aplicarse lo previsto en la referida ley. [...]

**11.6.** Constituye un principio universal reconocido en los ordenamientos electorales, así como también en la jurisprudencia, doctrina y práctica comparada, el hecho de que los órganos máximos de justicia electoral juegan un rol determinante a través de su fallos, y en cuyos órganos recae la solemne obligación de preservar y garantizar los derechos que se ejercen en democracia, en tanto de dicho ejercicio es que se materializa la concreción del Estado, y por medio de cuya labor los órganos de justicia electoral contribuyen de manera sustancial a corregir distorsiones, defectos, debilidades y ambigüedades de las leyes y demás disposiciones normativas, de las cuales, en ciertas ocasiones adolecen los ordenamientos jurídicos, y que a su vez pudieran tener implicaciones en cuestiones tan trascendentales como el ejercicio de los derechos de participación política de los ciudadanos<sup>31</sup>.

El escenario antes vertido no pudiera ser posible —o al menos sería más difícil de que ocurriera— si en el ordenamiento jurídico dominicano, solo existiera una pieza normativa única que aborde

la proporción de género<sup>32</sup>. Existen espacios donde la codificación ha tenido impactos positivos, verbigracia, el Código de Trabajo fue, en su momento, una de las compilaciones normativas más avanzadas e influyentes que, a la fecha —al margen de la necesidad de actualización por la misma evolución del sistema—, permite una interpretación coherente de régimen laboral dominicano. Superar estas deficiencias exige no solo un esfuerzo interno de sistematización, sino también la apertura a experiencias y modelos de codificación aplicados en otros países de la región, cuyas lecciones pueden orientar una reforma electoral más coherente y efectiva.

## 7. Experiencias comparadas y lecciones para el contexto dominicano

La experiencia comparada demuestra que la codificación electoral, cuando se diseña y aplica con criterios técnicos claros, puede mejorar sustancialmente la coherencia normativa, fortalecer la coordinación interinstitucional en el sistema democrático. En Iberoamérica, varios países han avanzado hacia modelos integradores que ofrecen lecciones útiles para el caso dominicano.

### A. Modelos integradores en Iberoamérica

- Colombia

En Colombia, aunque la normativa no se denomina formalmente «código», se ha organizado

31 República Dominicana, Tribunal Superior Electoral, Sentencia TSE-085-2019, de fecha treinta (30) de octubre de dos mil diecinueve (2019), pp. 26-28.

32 Cfr. República Dominicana, Tribunal Constitucional, Sentencia TC/0620/23, de fecha seis (06) de octubre de dos mil veintitrés (2023). Disponible en: <https://tribunalsitestorage.blob.core.windows.net/media/38154/tc-0620-23-tc-01-2023-0013.pdf>. Mediante el artículo 142 de la Ley núm. 20-23, Orgánica del Régimen Electoral, se repitió la cláusula de la Ley núm. 15-19 que disponía la proporción «(...) por no menos de un cuarenta por ciento (40%) ni más de un sesenta por ciento (60%) de hombres y mujeres de la propuesta nacional». En consecuencia, por aplicación de la sentencia referenciada, el Tribunal Constitucional se vio en la obligación de cerrar el debate sobre la proporción de género, declarando no conforme con la Constitución la parte in fine del referido artículo 142 y estableciendo que la interpretación constitucional del artículo sería «por demarcación territorial».

en un Estatuto Electoral que integra la organización y funcionamiento de la Registraduría Nacional del Estado Civil, el régimen de partidos y movimientos políticos, así como los procedimientos administrativos y contencioso-electorales. Este enfoque ha permitido una mayor coherencia en la aplicación de las normas, aunque persisten retos derivados de la dispersión residual en leyes especiales.

- **Ecuador**

En el caso de Ecuador, desde **2009** rige la Ley Orgánica Electoral y de Organizaciones Políticas, —ha recibido modificaciones importantes en varias ocasiones— conocida como Código de la Democracia, que unifica en un solo cuerpo normativo las disposiciones sobre organización electoral, financiamiento político, funcionamiento de partidos, procedimientos comiciales y justicia electoral. Este modelo integra la administración y la justicia electoral en un marco común, establece uniformidad en los plazos y medios de impugnación, y facilita la claridad normativa para participantes y autoridades.

- **México**

En México, la reforma política de **2014** creó un sistema electoral nacional sustentado en leyes generales, destacando la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales (LGIEPE) —ha recibido modificaciones importantes en varias ocasiones—. Esta normativa armoniza las reglas electorales federales y locales, define competencias claras entre el Instituto Nacional Electoral (INE) y los organismos públicos locales, e introduce estándares uniformes

para partidos, candidatos independientes y procesos de fiscalización. El modelo mexicano evidencia que la codificación puede funcionar en sistemas federales complejos.

- **Perú**

Perú, cuya Ley Orgánica de Elecciones concentra tanto la regulación administrativa como la competencia judicial electoral, asignada al Jurado Nacional de Elecciones. Su estructura integral ha facilitado la gestión ordenada de reformas y la preservación de la estabilidad normativa.

### ***B. Resultados obtenidos y adaptabilidad al sistema dominicano***

El examen comparado de las experiencias de Colombia, Ecuador, México y Perú evidencia que la codificación electoral, aun con matices propios en cada jurisdicción, ha generado beneficios tangibles en tres dimensiones principales: coherencia normativa, eficiencia institucional y confianza ciudadana.

Respaldada por la experiencia iberoamericana, la codificación electoral reduce dispersión y contradicciones, estandariza procedimientos y clarifica competencias, mejora la coordinación y el uso de recursos y refuerza la seguridad jurídica; por ello se justifica, con base técnica y constitucional, un código de derecho electoral y procesal electoral ajustado al sistema democrático nacional.

## 8. Justificación y objetivos de un código de derecho electoral y procesal electoral

### A. Fundamentación de la necesidad de codificación

«El código y la codificación implican, pues, cambio, mutación, externa e internamente, tanto del aspecto formal del derecho como de su aspecto material (...) un solo texto legal, que recoge un complejo normativo unitario, sistemáticamente ordenado y subdividido en artículos (...)»<sup>33</sup> permite unificar criterios, reducir la discrecionalidad y delimitar con precisión competencias y plazos, tal como lo evidencian experiencias como la LGIPE mexicana.

Sobre lo anterior, Sánchez Cordero (2001, p. 256), citando a Bobbio (1998, p. 154), indica:

La norma jurídica era la única perspectiva a través de la cual se estudiaba el derecho, dado que el ordenamiento jurídico era, cuando más, un conjunto de normas, mas no un objeto autónomo de estudio, con problemas particulares y diversos. Para expresarlo con una metáfora, se consideraba el árbol, pero no el bosque<sup>34</sup>.

Como observa Zagrebelsky «no podríamos comprender esta concepción en su significado pleno si pensáramos “en la ley” como “en las leyes” que conocemos hoy ... La ley por excelencia era entonces el código ... En verdad, el código es la obra que representa toda una

época del derecho»<sup>35</sup>. Asimismo, un marco único optimiza la coordinación institucional y simplifica procedimientos, facilitando la capacitación y la gestión administrativa.

### B. Desafíos para la creación de un código electoral único

El modelo actual, basado en leyes y reglamentos dispersos —como la Ley núm. 33-18 de Partidos, la Ley núm. 20-23 de Régimen Electoral y la Ley núm. 39-25 del Tribunal Superior Electoral—, genera vacíos, duplicidades y tensiones interpretativas que se traducen en incertidumbre jurídica.

Uno de los principales retos es la integración de normativas con finalidades distintas: la Ley de Partidos regula la vida interna y el financiamiento político; la Ley de Régimen Electoral establece las reglas para la organización de comicios; y la Ley del Tribunal Superior Electoral norma la jurisdicción contenciosa electoral. Su incorporación en un solo cuerpo no debe interpretarse como una intromisión en las autonomías institucionales, sino como un marco articulador que refuerce la transparencia y la rendición de cuentas en todo el ciclo electoral.

El consenso político es una piedra angular: sin acuerdos amplios, la reforma corre el riesgo de ser parcial o ineficaz. Sin embargo, la experiencia comparada —como los procesos de codificación electoral en México— demuestra que el diálogo político puede superar resistencias

33 Héctor Fix-Zamudio, *Codificación*, en *Enciclopedia Jurídica Mexicana* [en línea]. México: Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM – Porrúa, 2004, p. 305. Disponible en: <https://archivos.juridicas.unam.mx/www/bjv/libros/9/4037/15.pdf> [Consultado: 18 agosto 2025].

34 Sánchez Cordero de García Villegas, Olga. (2001). *El futuro del Derecho. Hacia la unificación de las normas procesales como inicio de un salto evolutivo en la justicia*. De <https://acusatorio.wordpress.com/wp-content/uploads/2015/03/el-futuro-del-derecho.pdf>

35 Zagrebelsky, Gustavo. *El derecho dúctil*, 2011, p. 32.

iniciales cuando se evidencia que el objetivo final es un sistema electoral más estable, confiable y equitativo.

La identificación de estos desafíos no solo permite dimensionar la complejidad del proceso de codificación, sino que abre paso a la formulación concreta de un diseño legislativo integral.

## 9. Propuesta para un código de derecho electoral y procesal electoral

La elaboración de un texto único en materia electoral busca superar la dispersión normativa mediante un marco estructurado que unifique disposiciones sustantivas y procesales relacionadas con la organización de elecciones, el control de la actividad política y la garantía de derechos.

### A. Elementos esenciales y estructura recomendada

El diseño del código electoral único debe organizarse de manera que garantice la coherencia normativa, la funcionalidad operativa y la protección de los principios democráticos. Se propone una estructura articulada en ocho partes:

#### Parte I – Disposiciones generales

Contendría el objeto, los principios rectores, las fuentes normativas y las definiciones esenciales, estableciendo el marco conceptual y los fundamentos constitucionales que orientan el sistema electoral.

#### Parte II – Sistema de partidos políticos

Regularía las condiciones de constitución, funcionamiento, financiamiento, fiscalización

y disolución de partidos, agrupaciones y movimientos políticos, asegurando su coordinación con eventuales leyes especiales y reforzando la transparencia y la equidad en la competencia política.

#### Parte III – Candidaturas independientes

Regularía los requisitos, derechos y obligaciones de los ciudadanos que aspiren a cargos electivos sin pertenecer a partidos políticos, incluyendo inscripción, acceso a medios y garantías de igualdad en la competencia.

#### Parte IV – Organización electoral y administración del proceso

Definiría las atribuciones, competencias y mecanismos de coordinación de la Junta Central Electoral, así como las funciones operativas vinculadas a la organización, supervisión y logística de los procesos electorales.

#### Parte V – Régimen electoral

Establecería las reglas sobre inscripción de electores, registro de candidaturas, desarrollo de campañas, uso de propaganda y medios, financiamiento electoral y mecanismos de rendición de cuentas, todo con criterios de transparencia y control.

#### Parte VI – Infracciones y delitos electorales

Tipificar las conductas ilícitas, las sanciones aplicables y los procedimientos sancionadores, asegurando proporcionalidad y respeto a las garantías procesales.



## Parte VII – Jurisdicción electoral

Regularía la estructura, competencias y procedimientos del Tribunal Superior Electoral, asegurando su independencia, especialización y eficacia en la resolución de controversias.

## Parte VIII – Procedimiento contencioso-electoral

Incorporaría reglas procesales claras sobre plazos, medios de impugnación, medidas cautelares, ejecución de sentencias y coordinación con otras instancias jurisdiccionales.

## Disposiciones finales y transitorias

Esta arquitectura unificada permitiría al sistema electoral dominicano superar la dispersión normativa, optimizar la coordinación institucional, alineando la legislación con estándares internacionales y asegurando un marco previsible y estable para los procesos electorales.

### B. Hoja de ruta legislativa

La adopción de un código de derecho electoral y procesal electoral requiere un itinerario claro que garantice rigor técnico, legitimidad política y viabilidad operativa. El código debe concebirse no como un simple ejercicio de compilación normativa, sino como una reforma estructural destinada a fortalecer la coherencia del sistema electoral y su alineación con los principios constitucionales y las mejores prácticas comparadas.

En este sentido, se plantea una hoja de ruta en seis etapas articuladas:

- a). Conformación de una comisión técnica interinstitucional.
- b). Inventario y depuración normativa, con identificación de disposiciones redundantes o contradictorias y derogatoria expresa de aquellas incompatibles con el nuevo marco.
- c). Definición de la técnica legislativa de codificación, incorporando principios rectores, definiciones, fuentes, jerarquía normativa y cláusulas de coordinación reglamentaria, asegurando unidad conceptual y operativa.
- d). Inclusión de un título procesal electoral unificado, que abarque competencias, plazos, medios de impugnación, medidas cautelares y reglas de ejecución, fortaleciendo la tutela jurisdiccional efectiva.
- e). Establecimiento de disposiciones transitorias y un calendario de implementación escalonado, que permita la adaptación progresiva de las instituciones y actores políticos a las nuevas reglas en función del ciclo electoral.
- f). Incorporación de una cláusula de evaluación ex post, que disponga la revisión técnico-normativa al concluir el primer ciclo de aplicación, con base en indicadores objetivos de desempeño institucional y satisfacción ciudadana.

Un diseño metodológico de este tipo no solo asegura una transición ordenada, muestra un proceso de codificación exitoso apoyado en diagnósticos rigurosos, consensos políticos

amplios y mecanismos de ajuste posteriores a su entrada en vigor.

## Conclusión

La redacción de un código de derecho electoral y procesal electoral constituye una condición indispensable para superar la fragmentación, elevar la seguridad jurídica y garantizar la integridad de los procesos comiciales. De la revisión normativa y jurisprudencial se desprenden tres hallazgos esenciales: (i) la dispersión normativa electoral, al distribuir disposiciones y procedimientos en diferentes leyes y reglamentos sin plena armonización, abre márgenes de interpretación dispares entre las autoridades, comprometiendo la uniformidad y previsibilidad en la aplicación de las reglas; (ii) las reformas fragmentadas y recurrentes posteriores a cada proceso electoral erosionan la estabilidad del marco regulatorio y dificultan la consolidación de criterios claros y permanentes; y (iii) la ausencia de un cuerpo legal sistematizado limita la coordinación efectiva entre los órganos de la administración electoral y la jurisdicción especializada, afectando la coherencia y eficacia del sistema en su conjunto.

En este sentido, cobra especial relevancia el principio de soberanía popular, en tanto fundamento último de la autoridad normativa del Estado. Como recordaba Jean Bodin que «(...) es quien por primera vez utiliza la palabra y es el máximo representante de la “soberanía”, a la que define como un “poder absoluto y perpetuo de la república” y estructurándola con

tres características fundamentales: absoluta, perpetua e indivisible»<sup>36</sup>.

Así, la sistematización del marco electoral no es solo un ejercicio técnico, sino una manifestación concreta de la soberanía popular en la medida en que permite que las reglas que rigen la representación política emanen de un cuerpo normativo único, coherente y accesible.

El compromiso colectivo debe orientarse a impulsar este proyecto, conscientes de que un sistema electoral robusto y unificado no solo es la base de la representación genuina, sino también el cimiento sobre el que se asienta el modelo de gobierno que aspiramos a consolidar. Trabajar en esta dirección es garantizar un país más justo, democrático y próspero para las generaciones presentes y futuras.

---

36 República Dominicana. *Constitución comentada por los jueces del Poder Judicial*. Tomo I. Santo Domingo: Poder Judicial, Escuela Nacional de la Judicatura, 2019, p. 47.

## Referencias

Cabanellas de Torres, Guillermo. *Diccionario jurídico elemental*. 18.<sup>a</sup> ed. Buenos Aires: Heliasta, 2006, p. 85.

Colombia. Corte Constitucional. *Acción de Tutela*. Sentencia T-291/16, 2 de junio de 2016, párr. 23. Disponible en: <https://www.corte-constitucional.gov.co/relatoria/2016/t-291-16.htm> [consulta: 21 agosto 2025].

Coscolluela Montaner, Luis. *Manual de Derecho Administrativo*. 33.<sup>a</sup> ed. Cizur Menor (Navarra): Aranzadi, 2022. ISBN 978-84-1125-548-6.

Eizaguirre Bermejo, José María. *Civil law: la vigencia de una categoría convencional*. *Anuario de Derecho Civil*, tomo LXV, fascículo II. Madrid: Ministerio de Justicia, 2012, pp. 533-546. Disponible en: <https://revistas.mjusticia.gob.es/index.php/ADC/article/view/3694>

Ferrajoli, Luigi. *Los derechos y sus garantías: conversación con Mauro Barberi*. Madrid: Editorial Trotta, 2016, p. 22. ISBN 978-84-9879-620-9.

Fix-Zamudio, Héctor. "Codificación". En: *Enciclopedia Jurídica Mexicana* [en línea]. México: Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM – Porrúa, 2004, pp. 291-305. Disponible en: <https://archivos.juridicas.unam.mx/www/bjv/libros/9/4037/15.pdf> [consulta: 15 junio 2025].

Galiana, Andrea. *Common Law y Civil Law: Diferencias clave* [en línea].

En: Kelsen & Hart, 12 de julio de 2024. [Consulta: 18 de junio de 2025].

Disponible en: <https://www.kelsen-hart.es/common-law-y-civil-law-diferencias-clave/>

Galván Rivera, Flavio. El principio de legalidad en materia electoral. En: *Tendencias contemporáneas del derecho electoral en el mundo. Memoria del II Congreso Internacional de Derecho Electoral*. México: Cámara de Diputados del H. Congreso de la Unión; Instituto Federal Electoral; Tribunal Federal Electoral; Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM, 1993, pp. 677-701.

Galván Rivera, Flavio. *Derecho procesal electoral: concepto, génesis y autonomía*. Conferencia, Universidad Nacional Autónoma de México, Facultad de Derecho, 29 de abril de 2014. México: Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, 2014.

Kelsen, Hans. *Teoría pura del derecho*. 1.<sup>a</sup> ed. México: Universidad Nacional Autónoma de México, 1960.

Kelsen, Hans. *Teoría pura del derecho: introducción a los problemas de la ciencia jurídica*. 1.<sup>a</sup> ed. española. Madrid: Trotta, octubre 2011 [obra original de 1934]. ISBN 978-8498792355.

Nohlen, Dieter, et al. *Tratado de derecho electoral comparado de América Latina* [en línea]. 2.<sup>a</sup> ed. México: Fondo de Cultura Económica; Instituto Interamericano de Derechos Humanos; Universidad de Heidelberg; International IDEA; Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación; Instituto Federal Electoral, 2007, pp. 27-38. ISBN. 978-968-16-8283-5.

Real Academia Española; Consejo General del Poder Judicial. *Diccionario del español jurídico*. Madrid: Editorial Planeta, 2019.

República Dominicana. *Constitución comentada por los jueces del Poder Judicial*. Tomo I. Santo Domingo: Poder Judicial, Escuela Nacional de la Judicatura, 2019, p. 882. ISBN 978-9945-425-79-6.

República Dominicana. *Constitución de la República Dominicana 2024*. Santo Domingo, 31 de octubre de 2024.

República Dominicana. *Ley núm. 15-19, Orgánica del Régimen Electoral*, 18 de febrero de 2019.

República Dominicana. *Ley núm. 33-18, de Partidos, Agrupaciones y Movimientos Políticos*, 15 de agosto de 2018.

República Dominicana. Tribunal Constitucional. *Acción directa de inconstitucionalidad*. Sentencia TC/0552/15, 3 de diciembre de 2015.

República Dominicana. Tribunal Constitucional. *Acción directa de inconstitucionalidad*. Sentencia TC/0100/13, 2013. Disponible en: <https://tribunalsitestorage.blob.core.windows.net/media/7524/sentencia-tc-0100-13-c.pdf>.

República Dominicana. Tribunal Superior Electoral. *Sentencia TSE-085-2019*, 30 de octubre de 2019. [en línea]. 2022. Disponible en: [https://drive.google.com/file/d/1m-klqRxy6MBhtf3jihPNY0bwcgdHDY34u/view?usp=drive\\_web](https://drive.google.com/file/d/1m-klqRxy6MBhtf3jihPNY0bwcgdHDY34u/view?usp=drive_web)

Sánchez Cordero de García Villegas, Olga. *El futuro del Derecho. Hacia la unificación de las normas procesales como inicio de un salto evolutivo en la justicia*, [en línea]. 2001. Disponible en: [https://acusatorio.files.wordpress.com/2015/03/el-futuro-del-derecho.pdf?utm\\_source=](https://acusatorio.files.wordpress.com/2015/03/el-futuro-del-derecho.pdf?utm_source=)

Zagrebelsky, Gustavo. *El derecho dúctil: ley, derechos, justicia*. 10.<sup>a</sup> ed. Madrid: Editorial Trotta, 2011. ISBN 978-84-8174-071-7.